



17th St. & Constitution Avenue N.W.  
Washington, D.C. 20006  
Estados Unidos de América

**COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL  
CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS**

**CICAD**

Organización de los Estados Americanos

T. 202.458.3000

[www.oas.org](http://www.oas.org)

Secretaría de Seguridad Multidimensional

**XLI REUNION DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS  
1 Y 2 DE OCTUBRE DE 2015  
LIMA, PERU**

**OEA/Ser.L/XIV.4.41  
CICAD/doc.7/15  
28 septiembre 2015  
Original: Español**

**INFORME COORDINACIÓN SUBGRUPO DE COOPERACIÓN E INTEGRACIÓN DE UIF/OIC  
SEGURIDAD DE LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA ALA/CFT, PARTICULARMENTE DE LOS MIEMBROS  
DE LAS UIF, OIC Y OAB**

## **Informe Coordinación Subgrupo de cooperación e integración de UIF/OIC**

### **SEGURIDAD DE LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA ALA/CFT, PARTICULARMENTE DE LOS MIEMBROS DE LAS UIF, OIC y OAB**

#### **I. Objetivo:**

Exponer en formato de informe los resultados obtenidos a partir de la encuesta modelo entregada con fecha 23 de mayo de 2014, que fue contestada durante el mismo año y presentado los resultados en la reunión del septiembre (Uruguay). En dicha reunión se decidió aprobar los resultados de la encuesta y recomendar que la comisión lo apruebe en su próximo periodo ordinario de sesiones para que se adopte como un documento de referencia e insumo que permita formular recomendaciones en este ámbito<sup>1</sup>.

Posteriormente en la reunión de grupos de trabajo realizada en Washington DC en el mes de mayo de 2015, se decidió por el grupo enviar el informe a las distintas delegaciones con el objeto que pudiesen agregar o sugerir comentarios.

#### **II. Metodología:**

Se analizaron los resultados de la encuesta realizada en materia de seguridad. Los resultados estaban tabulados y sistematizados en una tabla Excel, que fue presentada y aprobada en la reunión de Septiembre de 2014.

Los resultados se referían a 12 preguntas que fueron realizadas en la encuesta, a saber:

1	¿Dentro de sus Sistema ALA/CFT posee normas especiales referidas a la protección de los funcionarios de las UIF / OIC /OAB?
2	¿Posee protocolos o procedimientos de seguridad preventivos para los funcionarios de la UIF /OIC /OAB?
3	¿Posee protocolos o procedimientos de seguridad reactivos en el caso que exista una amenaza a un funcionario de la UIF/OIC/ OAB?
4	¿Su país tiene normas en materia de transparencia que exijan publicar información respecto de los funcionarios UIF/OIC/OAB?
5	¿Exista alguna institución en particular que le corresponda evaluar el nivel de riesgo ante una amenaza?
6	¿Existe alguna institución que sea la encargada de dejar sin efecto determinadas medidas de seguridad, por no existir un determinado nivel de riesgo?
7	¿Existe una política de auto cuidado de los funcionarios del sistema ALA/CFT que permita prevenir situaciones de riesgo?

---

<sup>1</sup> El presente informe se limita principalmente a los resultados entregados por los siguientes países: Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela.

8	¿Se han generado mecanismos de cooperación entre los distintos actores del sistema ALA/CFT con el objeto de enfrentar de forma integral una amenaza?
9	¿Las distintas instituciones contratan algún tipo de seguro respecto de los funcionarios que trabajan en este tipo de investigaciones?
10	¿Los distintos actores del sistema privilegian la protección de los funcionarios por sobre los resultados de una determinada investigación?
11	¿En el caso de existir una amenaza inminente contra alguno de los miembros de la UIF, OIC u OAB, las medidas de seguridad tienden a distanciarlo del caso, o por el contrario, se prefiere que siga a cargo del mismo funcionario?
12	¿Posee protocolos que permitan brindar protección jurídica a sus funcionarios?

Se analizó de forma individual cada una de las respuestas obtenidas, con la finalidad de destacar y relevar determinadas prácticas que el grupo pudiese tomar en consideración para realizar recomendaciones.

### III. Análisis particular de las respuestas

**PREGUNTA 1:**  
**¿DENTRO DE SUS SISTEMA ALA/CFT POSEE NORMAS ESPECIALES REFERIDAS A LA PROTECCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LAS UIF/OIC/OAB?**

#### RESPUESTA NO:

**De un total de 15 países, 8 de ellos respondieron negativamente<sup>2</sup> de los cuales, 2 (Chile y Venezuela) lo hicieron con observaciones de fondo:**

- En el caso de Chile, si bien no existen normas especiales que regulen la materia, con fecha 30 de marzo de 2009 Fiscal Nacional emitió el oficio reservado N° 168/2009 sobre procedimiento de protección de fiscales del Ministerio Público, estableciéndose como sujetos protegidos no solo a los fiscales, sino además a los funcionarios y a la familia de fiscales y funcionarios. Para tal efecto, el oficio está fundado en dos principios: reserva y temporalidad. El primero de ellos consiste en que todos los antecedentes de los fiscales protegidos, la estrategia y las medidas que ésta contiene, como asimismo, los documentos que sirvan de sustento, deberán mantenerse en estricta reserva. El principio de temporalidad, por su parte, consiste en que la aplicación de las medidas de protección se mantendrá por el tiempo que subsista la situación de riesgo que la hizo necesaria. De esta manera, a partir del año 2009 existiría un procedimiento estandarizado que debe ser

<sup>2</sup> Corresponden a los siguientes Estados: Argentina, Bolivia, Guatemala, Paraguay, Perú, República Dominicana, Chile y Venezuela.

aplicado en todos aquellos casos en los cuales fiscales o funcionarios del Ministerio Público hayan recibido amenazas o amedrentamientos en el ejercicio de sus funciones.

- En el caso de Venezuela, si bien no existirían normas especiales de protección, existirían acciones que en la práctica se implementan, las que consistirían en protocolos, circulares y reglamentos internos (que no se especifican).

## **RESPUESTA SI:**

**De un total de 15 países, 7 de ellos respondieron afirmativamente<sup>3</sup>:**

1) Canadá: Se señala que hay que distinguir. En cuanto a normativa relacionada con FIU (FINTRAC):

- La sección 59 del PCMLTFA (Proceeds of Crime Money Laundering Terrorist Financing act) establece que un funcionario FINTRAC no puede ser forzado a comparecer en los tribunales, testificar o producir documentos, con excepción de casos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo o por contravenciones al PCMLTFA.
- El nombre del analista que trabajó en un caso FINTRAC no está incluido en la información reportada al destinatario (un funcionario de policía por ejemplo)
- Además, de conformidad con el artículo 60(8) del PCMLTFA, el Director de FINTRAC puede objetar la inclusión de cierta información por razones de interés público (por ejemplo, omitir la información personal del analista con el objeto de resguardar su bienestar)
- FINTRAC a su vez, se atiene a las políticas y directrices generales que son aplicables a todo el Gobierno de Canadá. Dichas políticas identifican responsabilidades genéricas de las diversas partes interesadas para el efectivo cumplimiento del programa departamental de seguridad.
- Finalmente, se refiere a una serie de estatutos, instrumentos regulatorios, políticas, directrices y estándares que rodean el programa de seguridad de FINTRAC.

Adicionalmente, en cuanto a normativa interna, se señala que existiría un código interno de conducta que establece medidas específicas para proteger a los funcionarios FINTRAC, y que estos recibirían además entrenamiento en políticas y directivas de seguridad

Tratándose de LEA: Se señala que las políticas y procedimientos para asegurar la protección de funcionarios policiales involucrados en operaciones encubiertas y especiales aplican también para las investigaciones por delitos financieros o económicos. La Sección de Seguridad del personal de la Policía canadiense real montada (RCMP)

---

<sup>3</sup> Corresponden a los siguientes Estados: Canadá, Costa Rica, Estados Unidos, Jamaica, México, Panamá y Colombia.

investiga, desarrolla e implementa políticas para resguardar a los funcionarios RCMP, la información y los bienes de lesiones.

- 2) Costa Rica: El artículo 160 de la ley 8204 sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo, contemplaría una forma de protección de funcionarios del Instituto Costarricense sobre drogas (ICD), incluyendo a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a la Unidad de Recuperación de Activos (URA). Se refiere a la autorización de sus vehículos para no utilizar placas oficiales con el fin de guardar confidencialidad de las labores y seguridad del personal, en los siguientes términos:

- “Artículo 160. Los vehículos asignados y utilizados por el Instituto Costarricense sobre Drogas estarán excluidos de rotulación y autorizados para no utilizar placas oficiales, con el propósito de guardar la confidencialidad respecto de sus labores y de la seguridad de su personal. El Registro Nacional prestará al Instituto las facilidades necesarias para ejecutar y asegurar la confidencialidad.”

- 3) Estados Unidos: Párrafo 5318 letra G N°3 del título 31 del Código de Regulaciones Federales, referido al dinero y finanzas<sup>4</sup> establece que, el banco, director, empleado o agente de cualquier banco, que reporte voluntariamente información acerca de transacciones sospechosas, no será responsable ante ninguna persona por dicho reporte o por cualquier error en la entrega de información de dicho reporte no aún respecto de la persona respecto de la cual fue elaborado el reporte. En este sentido, podemos señalar que se trata de una norma de protección respecto de eventuales acciones legales de la persona objeto del reporte en contra del sujeto obligado perteneciente a una institución bancaria.

- 4) Jamaica: El primer anexo 16 del Proceeds of Crime Act (POCA) permitiría a sus empleados usar un seudónimo después de que el Director haya firmado un certificado autorizando su utilización.

---

<sup>4</sup> (3) LIABILITY FOR DISCLOSURES. (A) IN GENERAL.—Any financial institution that makes a voluntary disclosure of any possible violation of law or regulation to a government agency or makes a disclosure pursuant to this subsection or any other authority, and any director, officer, employee, or agent of such institution who makes, or requires another to make any such disclosure, shall not be liable to any person under any law or regulation of the United States, any constitution, law, or regulation of any State or political subdivision of any State, or under any contract or other legally enforceable agreement (including any arbitration agreement), for such disclosure or for any failure to provide notice of such disclosure to the person who is the subject of such disclosure or any other person identified in the disclosure.

(B) RULE OF CONSTRUCTION.—Subparagraph (A) shall not be construed as creating— (i) any inference that the term “person”, as used in such subparagraph, may be construed more broadly than its ordinary usage so as to include any government or agency of government; or (ii) any immunity against, or otherwise affecting, any civil or criminal action brought by any government or agency of government to enforce any constitution, law, or regulation of such government or agency. [En Línea] Disponible en: <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2011-title31/pdf/USCODE-2011-title31-subtitleIV-chap53-subchapII-sec5318.pdf>

5) México: Cuenta con normas sobre protección de funcionarios, tanto en leyes, reglamentos como procedimientos en general y protocolos de actuación, según se detalla a continuación:

- Artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional: Considera como amenaza a la Seguridad Nacional, los **“actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada”**.
- Artículo 2 de la Ley Federal para la Protección a personas que intervienen en el Procedimiento Penal, define lo que se entiende por persona protegida: “Todo aquel individuo que pueda verse en situación de riesgo o peligro por su intervención en un procedimiento penal. Asimismo, dentro de dicho precepto se considerarán a las personas ligadas con vínculos de parentesco o afectivos con el testigo, víctima, ofendido o servidores públicos, que se vean en situación de riesgo o peligro por las actividades de aquellos en el proceso”.
- Artículo 3 del Reglamento del Servicio de Protección Federal<sup>5</sup> que establece que la función principal de dicho organismo es “proporcionar servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones, a las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal, órganos de carácter federal de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos constitucionalmente autónomo y demás instituciones públicas que así lo soliciten.”
- Artículo 25 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República: establece que al frente de la Policía habrá un Titular quien tendrá dentro de sus facultades la de: (xvii) proporcionar el servicio de seguridad y protección a personas que intervienen en procedimientos penales (...); la de (xvii) dirigir, coordinar, supervisar y evaluar los servicios de seguridad y protección a personas que por sus actividades se vean amenazadas en su integridad física, de acuerdo a la normatividad aplicable y a las que determine el Procurador.
- Artículo 80 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que establece dentro de las facultades del Director General de la Dirección General de Servicios Especiales de Seguridad y de Protección la de “implementar, dirigir y evaluar los servicios de protección a personas” de acuerdo a la normatividad aplicable y a los que ordene el Procurador”
- Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018: contiene la política para la Seguridad Nacional, que dirige, integra y coordina las acciones de las autoridades e instituciones que están vinculadas con los sectores de la seguridad, la defensa y el desarrollo a fin de prever, prevenir, disuadir, contener o desactivar aquellas vulnerabilidades, riesgos y amenazas que puedan comprometer el proyecto de nación

---

<sup>5</sup> El Servicio de Protección Federal es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública (Artículo 1 del Reglamento del Servicio de Protección Federal).

- Procuraduría General de la República proporciona el servicio de escolta a los funcionarios públicos de la Institución y en algunos casos, a otras del ámbito federal, que por desempeñar actividades de procuración de justicia, investigación y persecución de los delitos y por su participación de la integración de las averiguaciones previas y el desarrollo de los procesos penales se encuentran indefensos ante las acciones de grupos criminales, delincuencia organizada o narcotráfico.
  - Finalmente, se señala que el edificio de la UIF se encontraría blindado y estaría resguardado por el Servicio de Protección Federal.
- 6) Panamá: Si bien señaló que en los artículos 20, 331, 332 y 340 de la Ley N° 63 del 28 de agosto de 2008 existirían normas relativas a la protección de funcionarios de las UIF/OIC/OAB, dichos artículos se refieren a la protección de víctimas, testigos, denunciantes e intervinientes en el proceso<sup>6</sup>. Eso sí señaló estar trabajando en impulsar mayores medidas de protección para funcionarios de la UIF/UA. La Ley N° 23 de 27 de abril de 2015 “Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva” (G.O. 27768-B de 27 de abril de 2015) establece en sus artículos 55 a 58 medidas de confidencialidad aplicables a los organismos de supervisión y a la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Delito de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo, que los protegen inclusive después de haber cesado sus funciones; exalta la exención de responsabilidad penal y civil a directores, funcionarios y empleados que tengan la obligación de presentar reportes de operaciones sospechosas; ordena la adopción de medidas para resguardar la seguridad de empleados, directivos y agentes ante cualquier amenaza en el ejercicio de sus funciones; y prevé la cobertura de gastos y costos necesarios para su defensa, en la eventualidad de ser presentadas acciones en su contra, por el desempeño adecuado de sus funciones y obligaciones.

El contenido de las normas mencionadas es el siguiente:

“Artículo 55. Confidencialidad y reserva de la información. La información obtenida por un organismo de supervisión y la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Delito de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo en el ejercicio de sus funciones deberá mantenerse bajo estricta confidencialidad y solo podrá ser revelada al Ministerio Público, a los agentes con funciones de investigación penal y a las autoridades jurisdiccionales conforme a las disposiciones legales vigentes.

Los funcionarios de los organismos de supervisión y de la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Delito de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo que reciban y requieran por escrito a los sujetos obligados financieros, sujetos obligados no financieros y actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión, o tengan conocimiento de información por razón de lo establecido en esta Ley, deberán mantenerla en estricta reserva, confidencialidad y solamente podrá ser revelada al Ministerio Público, a los agentes con funciones de investigación penal y a

---

<sup>6</sup> El artículo 20 se refiere a la protección de la víctima, denunciantes y colaboradores, el 331 a la protección de la víctima, el 332 a medidas de protección de víctimas, peritos y otros intervinientes del proceso penal; y el 340 a la acusación en la audiencia de la Acusación. Cfr. Ley 63 de 28 de agosto de 2008, disponible en: [http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4\\_pan\\_ley63.pdf](http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_pan_ley63.pdf)

las autoridades jurisdiccionales conforme a las disposiciones legales vigentes. Los funcionarios de los organismos de supervisión y de la Unidad de Análisis Financiero que, directa o indirectamente, revelen, divulguen o hagan uso personal indebido a través de cualquier medio o forma de la información confidencial incumpliendo con su deber, responsabilidad y obligación de reserva y estricta confidencialidad, sin perjuicio de la responsabilidad civil y administrativa, serán sancionados según lo dispuesto en el Código Penal.

Los funcionarios públicos que, con motivos de los cargos que desempeñan, tengan acceso a la información de que trata este artículo quedarán obligados a guardar la debida confidencialidad, aun cuando cesen en sus funciones.

Todo funcionario público está en la obligación de denunciar a las autoridades competentes cualquier contravención y/o desviación a la disposición contenida en el presente artículo.”

Artículo 56. Exención de responsabilidad penal y civil. Los sujetos obligados financieros, sujetos obligados no financieros y actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión, que apliquen, sus directores, funcionarios y empleados no serán sujetos a responsabilidad penal y civil por presentar reportes de operaciones sospechosas o información relacionada en cumplimiento de la presente Ley.

Los sujetos obligados financieros, sujetos obligados no financieros y actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión no podrán hacer de conocimiento del cliente o de terceros que una información le ha sido solicitada o ha sido proporcionada, incluyendo el envío de reportes de operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Delito de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo en cumplimiento de esta Ley y demás normas vigentes. El incumplimiento conlleva la aplicación de las sanciones establecidas en esta Ley y sus reglamentaciones.”

Artículo 57. Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes. Los sujetos obligados financieros, sujetos obligados no financieros y actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión adoptarán las medidas adecuadas para mantener la confidencialidad sobre la identidad de los empleados, directivos o agentes que hayan realizado una comunicación o reporte a los órganos internos de prevención del sujeto obligado.

Las autoridades adoptarán las medidas apropiadas a fin de proteger frente a cualquier amenaza a los empleados, directivos o agentes de los sujetos obligados financieros, sujetos obligados no financieros y actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión, que comuniquen sospechas de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.”

“Artículo 58. Amparo legal. El director general de la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Delito de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo y sus respectivos funcionarios, así como los funcionarios de los organismos de supervisión y la persona o unidad responsable de servir como enlace con la Unidad de Análisis Financiero y el respectivo organismo de supervisión, tendrán derecho a que su respectiva institución o empleador les cubra los gastos y costos que sean necesarios para su defensa, cuando sean objeto de acciones, procesos, juicios o demandas derivados de actos y decisiones adoptados de conformidad con esta Ley y en el ejercicio adecuado y de buena fe de sus atribuciones, funciones u obligaciones.



El amparo legal a que se refiere este artículo se aplicará a dichos funcionarios por actos realizados en el ejercicio de sus cargos, aun después de haber cesado en sus funciones.

En caso de que el funcionario sea condenado y que sea demostrada la mala fe y dolo de su parte, deberá reembolsar a su institución los gastos en que incurrió para su defensa.”

- 7) Colombia: En lo que respecta a la UIAF y a los organismos de inteligencia, entre esos la UIAF, hay normas que establecen mecanismos para la protección de los funcionarios que los integran. La Ley 1621 de 2013 y muy especialmente el Título 3, artículos 2.2.3.1.1 al 2.2.3.11.2 del Decreto 1070 de 2015.

Merecen mención especial los párrafos del artículo 2.2.3.9.3 del Decreto 1070 de 2015, los cuales señalan que la identidad de los servidores públicos que cumplen con funciones de inteligencia debe mantenerse bajo reserva.

La Ley 1621 de 2013, por ejemplo, estableció excepción al deber de denunciar ante las autoridades o de declarar, a los funcionarios públicos de los organismos de inteligencia.

## **PREGUNTA 2:**

**¿POSEE PROTOCOLOS O PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD PREVENTIVOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA UIF /OIC /OAB?**

## **RESPUESTA NO:**

**De un total de 15 países, 6 respondieron negativamente<sup>7</sup>. De estos, Panamá y Chile lo hizo con observaciones de fondo:**

- En el caso de Panamá la Resolución de Gabinete N° 34 de 21 de junio de 2000 “Por la cual se adoptan los Fundamentos de la Política Panameña en Seguridad” (G.O. 24083 de 27 de junio de 2000) reconoce el concepto de Seguridad Integral para el tratamiento de las responsabilidades propias de los distintos ámbitos de la seguridad de la República de Panamá, entre los que se encuentra la protección de los ciudadanos en general y de su patrimonio contra el crimen organizado y la delincuencia común. En ese contexto, el Decreto Ejecutivo N° 263 de 19 de marzo de 2010 del Ministerio de la Presidencia “Que crea el Consejo de Seguridad Nacional” (G.O. 26493-A de 19 de marzo de 2010), atribuye a la Secretaría Ejecutiva de este estamento la responsabilidad de ejecutar las políticas y estrategias en materia de seguridad y defensa nacional (Artículo 9), especialmente para investigar, preparar y recabar la información necesaria para alertar y prevenir los riesgos y amenazas de la seguridad nacional. Dentro de ese contexto general, son articuladas las medidas preventivas, respecto a servidores públicos en general que puedan estar en amenaza o riesgo potencial por motivo de las investigaciones que llevan a cabo.

<sup>7</sup> Corresponden a los siguientes Estados: Bolivia, Chile, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Costa Rica.

- En el caso de Chile, si bien no existen normas especiales que regulen la materia, con fecha 30 de marzo de 2009 Fiscal Nacional emitió el oficio reservado N° 168/2009 sobre procedimiento de protección de fiscales del Ministerio Público, cuyo fundamento es la existencia de un riesgo que lo afecte a él o a su familia, derivado del ejercicio de sus funciones y frente al cual es necesario adoptar medidas de protección adecuadas para minimizarlo. En este sentido, para la evaluación del riesgo, señala que deben considerarse las siguientes circunstancias para elaborar la estrategia de protección a seguir: (1) Existencia de una amenaza; (2) antecedentes sociales del fiscal y de su familia; (3) características de los potenciales agresores y (4) tipo de delito.

## **RESPUESTA SI:**

**De un total de 15 países, 9 de ellos respondieron afirmativamente<sup>8</sup>:**

- 1) Argentina: Se señala que todas las dependencias de la UIF de Argentina se encuentran custodiadas por efectivos de la Policía Federal de Argentina. Asimismo, el Presidente y Vicepresidente de la UIF de Argentina cuentan con custodia policial personal.
- 2) Canadá: Tratándose de FIU, se remite a la respuesta dada en la pregunta N°1. En cuanto a LEA, no existen políticas especiales pero las políticas policiales cubren la protección de la información, la propiedad policial y el bienestar físico de los funcionarios policiales, incluyendo equipamiento especializado y entrenamiento en defensa personal. La toma de conciencia respecto de la seguridad es la medida mas efectiva para reducir el riesgo de incidentes o violaciones a la seguridad. El RCMP tiene un Curso al respecto, el que está disponible para los empleados individuales del RCMP.
- 3) Estados Unidos: Se señala que todas las agencias de gobierno de los Estados Unidos ha establecido protocolos y procedimiento para la seguridad de su personal. En concreto, la Oficina de Seguridad de la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) implementa políticas de seguridad, procedimientos, normas, capacitación y métodos para la identificación y protección de información, del personal, de los bienes, instalaciones, operaciones o material de la divulgación no autorizada, mal uso, robo, asalto, vandalismo, espionaje, sabotaje o pérdida.
- 4) Guatemala: Se señala que el Jefe de la Unidad de Análisis Financiero tiene a su disposición un vehículo con blindaje especial.
- 5) Jamaica: Se señala que como protocolo interno los “oficiales” no utilizan vehículos motorizados personales en las operaciones y, además, existiría un “Protocolo de Divulgación según las indicaciones de la DPP”. Según dicho Protocolo, las revelaciones efectuadas por los funcionarios a los investigadores son tratadas como inteligencia, los que requieren la obtención previa de una orden de fabricación

---

<sup>8</sup> Corresponden a los siguientes Estados: Argentina, Guatemala, Perú, Venezuela, Jamaica, México, EE.UU, Canadá y Colombia. .

(“Production Order”) para acceder a la información de la institución financiera, a fin de que esta pueda ser utilizada como prueba. Tanto en analista como el personal bancario, están por tanto, protegidos como fuentes de información.

- 6) México: No contiene leyes específicas, pero si normativa interna respecto de restricciones para el ingreso a las instalaciones.
- 7) Perú: La UIF-Perú ha establecido un protocolo de seguridad para que los funcionarios que realizan la labor de análisis de los ROS no sean identificados. Dicho protocolo consistiría en que: (i) En los informes de inteligencia financiera que se remitan al Ministerio Público del Perú no se consignen los vistos de los funcionarios que han desarrollado o revisado los mismos; y (ii) En la figura del Perito informante de la UIF (SBS), establecido por la normativa vigente de Prevención de LA/FT del Perú. Dicho perito es quien acude a las audiencias judiciales para sostener la verificación técnica de los informes elaborados por sus funcionarios y de los reportes efectuados por el Oficial de Cumplimiento, cuyas identidades se mantienen en reserva. Sin embargo, este funcionario sería el vulnerable.
- 8) Venezuela: Se señala que según se ha establecido en reglamentos internos y circulares, es deber del funcionario informar de inmediato cuando tuviere conocimiento de la existencia de una condición insegura capaz de causarle daño a su salud o a su vida o la de terceros.
- 9) Colombia: Sí los posee. El hecho de garantizar la reserva de la identidad de los funcionarios de inteligencia, o el de haber contemplado al doble identidad, son hechos que así lo demuestran.

### **PREGUNTA 3:**

**¿POSEE PROTOCOLOS O PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD REACTIVOS EN EL CASO QUE EXISTA UNA AMENAZA A UN FUNCIONARIO DE LA UIF/OIC/ OAB?**

### **RESPUESTA NO:**

**De un total de 15 países, 6 respondieron negativamente<sup>9</sup>. De estos, 1 (Costa Rica) lo hizo con observaciones de fondo:**

- En el caso de Costa Rica, no existirían protocolos a nivel interno del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD). Tratándose de la UIF, se señala que en la práctica los funcionarios se mantienen en el anonimato, por lo que no dan declaraciones a la prensa ni se exponen en público, sino que únicamente para efectos de capacitación a entidades financieras o coordinaciones con organismos afines. Por su parte, tratándose de la URA, no existirían procedimientos ni protocolos de seguridad reactivos en el caso de que exista una amenaza a un funcionario. La normativa contenida en la ley N° 8720 sobre “protección a víctimas, testigos y demás sujetos

---

<sup>9</sup> Corresponden a los siguientes Estados: Perú, Guatemala, República Dominicana, Paraguay, Bolivia y Costa Rica.

intervinientes en el Proceso Penal, reformas y adición al Código Procesal Penal y al Código Penal”, sería aplicable a personas sujetas a protección, no siendo exclusivo para los funcionarios del ICD.

## **RESPUESTA SI:**

**De un total de 15 países, 9 de ellos respondieron afirmativamente<sup>10</sup>:**

- 1) Argentina: Se señalan la ley N° 23984 (Código Procesal Penal de la Nación) y la Ley N° 18711 de Fuerzas de Seguridad, sin dar detalles de artículos o normas específicas. Al respecto, se señala además que ante una amenaza, el Poder Judicial y la Policía tomarán las medidas necesarias para proteger la integridad de la persona en cuestión.
- 2) Canadá: Tratándose de FIU, se remite a la respuesta dada en la pregunta N°1. En cuanto a LEA, la sección 264.1 del Código Penal de Canadá considera delito la amenaza de causar la muerte, causar lesiones o daños a la propiedad.
- 3) Chile: Se señala que la estrategia de protección es elaborada en conjunto por el Fiscal Regional, el Jefe de URAVIT y el Fiscal Adjunto a cargo de la investigación respectiva, y contempla la determinación de los siguientes puntos: (1) Medidas de Protección que se aplicarán; (2) Medidas de Apoyo que permitan reforzar las medidas de protección; (3) Plazos de vigencia; (4) Implementación; (5) Evaluación permanente.

Por su parte, el que exista una evaluación permanente, permite ir verificando la aplicación de determinadas medidas, su efectividad e impacto, con la finalidad de que se puedan realizar los ajustes correspondientes, ya sea intensificando o disminuyendo las medidas de seguridad adoptadas o, cuando corresponda, proponer su término.

- 4) Estados Unidos: Se remite a la respuesta dada a propósito de la pregunta N° 2<sup>11</sup>
- 5) Jamaica: Se señala que existe un Memorando de entendimiento (MOU) con la policía de Jamaica (JCF), sin dar detalles al respecto.
- 6) México: Se señala que existirían procedimientos específicos y/o protocolos en cada una de las dependencias e instituciones gubernamentales; pero que sin embargo, no es posible proporcionar información al respecto debido a que se vulneraría el servicio de seguridad que se brinda.
- 7) Panamá: Si bien señaló que en los artículos 20, 331, 332 y 340 de la Ley N° 63 del 28 de agosto de 2008 existirían normas relativas a la protección de funcionarios de las UIF/OIC/OAB, dichos artículos se refieren a la protección de víctimas, testigos,

---

<sup>10</sup> Corresponden a los siguientes Estados: Canadá, Venezuela, EE.UU, Argentina, Jamaica, México, Chile, Panamá y Colombia.

<sup>11</sup> “Todas las agencias de gobierno de los Estados Unidos ha establecido protocolos y procedimiento para la seguridad de su personal. En concreto, la Oficina de Seguridad de la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) implementa políticas de seguridad, procedimientos, normas, capacitación y métodos para la identificación y protección de información, del personal, de los bienes, instalaciones, operaciones o material de la divulgación no autorizada, mal uso, robo, asalto, vandalismo, espionaje, sabotaje o pérdida.”

denunciantes e intervinientes en el proceso<sup>12</sup>. Se destaca que el artículo 336 contiene un listado de medidas aplicables a otros intervinientes en el proceso penal, especialmente dirigidos a reaccionar frente a una amenaza activa a la seguridad de éstos, cuya responsabilidad en su implementación está a cargo del Ministerio Público (Artículo 20). El artículo 336 dice así:

“Artículo 336. Otras medidas. Además de las medidas de protección establecidas en los artículos precedentes, para salvaguardar la integridad de las víctimas, los testigos, los peritos y otros intervinientes en el proceso penal, podrán aplicarse las siguientes:

- Entrega de celulares o teléfonos móviles.
- Refuerzo de seguridad en los domicilios, en muros, puertas, ventanas y demás.
- Protección policial permanente o mientras se mantengan las circunstancias de peligro.
- Reubicación o cambio de lugar de residencia, ya sea temporal o permanente.
- Entrega de alarmas personales.
- Cambio del número telefónico de la persona protegida.
- Cambio del lugar de trabajo o centros de estudio.
- Reubicación del colaborador o testigo recluido en ambientes carcelarios que garanticen su seguridad e integridad física.
- Cualquiera otra que determinen las leyes.

Estas medidas no requieren autorización judicial.

8) Venezuela: Se señala que son aplicables la Ley del Estatuto de la Función Pública y el Código Penal, además de protocolos y normativas internas.

- Al respecto, en caso de existir una amenaza contra un Funcionario que labore en una UIF/OIC/OAB señalan que le será brindada la protección necesaria a través de los Organismos de Seguridad del Estado. Lo anterior, ya que Los Funcionarios que laboran en la UIF y OAB son considerados Funcionarios Públicos, por lo que su actuación se rige por la Ley del Estatuto de la Función Pública publicada en la Gaceta Oficial N° 37.522 del 06 de septiembre de 2002.
- Además, los cuerpos armados que integran la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los servicios policiales se regirán por sus estatutos orgánicos o normativas especiales, quienes se encuentran directamente vinculados a la seguridad y defensa de la nación y al mantenimiento del orden público.
- Asimismo, en caso de que un Funcionario Público recibiera una amenaza con motivo de sus funciones o en el momento mismo de estar ejerciéndolas, la persona que la cometa podrá ser castigada con pena de prisión de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Venezolano publicado en la Gaceta Oficial N° 39.818 del 12/12/11. El Funcionario

---

<sup>12</sup> El artículo 20 se refiere a la protección de la víctima, denunciantes y colaboradores, el 331 a la protección de la víctima, el 332 a medidas de protección de víctimas, peritos y otros intervinientes del proceso penal; y el 340 a la acusación en la audiencia de la Acusación. Cfr. Ley 63 de 28 de agosto de 2008, disponible en: [http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4\\_pan\\_ley63.pdf](http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_pan_ley63.pdf)

público podrá realizar Denuncia ante el Ministerio Público en la Dirección de Atención a la Víctima, quien podrá dictar medida de protección dirigida a establecer los procedimientos ante las autoridades Policiales, de inteligencia e investigación.

- 9) Colombia. En lo que tiene que ver con la UIAF, Colombia sí los posee. El artículo 41 de la Ley 1621 de 2013 ha señalado que los funcionarios de inteligencia que se vean compelidos a riesgo y/o amenaza deben tener la debida protección del Estado.

#### **PREGUNTA 4:**

**¿SU PAÍS TIENE NORMAS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA QUE EXIJAN PUBLICAR INFORMACIÓN RESPECTO DE LOS FUNCIONARIOS UIF/OIC/OAB?**

#### **RESPUESTA NO:**

**De un total de 15 países, solo 5 respondieron negativamente<sup>13</sup>. De estos, 2 (Venezuela y Canadá) lo hicieron con observaciones de fondo:**

- En el caso de Venezuela, se señaló que los trabajadores de acuerdo con lo dispuesto en el marco jurídico vigente tendrán derecho a la privacidad de su correspondencia, comunicaciones y al libre acceso a todos los datos e informaciones referidos a su persona. Sin embargo, la única información que es pública es la Constancia de Trabajo para el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS), documento que llena el empleador para certificar al Seguro Social que el trabajador mantuvo o mantiene una relación laboral con la empresa u organismo del Estado, indicando tiempo y salarios devengados; con el objeto de que el Instituto verifique su información.
- En el caso de Canadá, se señala que si bien existen leyes de transparencia respecto del acceso a la información, estas excluyen la relativa a información personal de los funcionarios. Sin embargo, en cuanto a LEA, no existe ninguna ley en Canadá que prohíba a alguna persona tomar fotografías o grabar a un oficial de policía en el desempeño de sus funciones en un lugar público (estos no tienen derecho a la privacidad ante las personas cuando ejecutan sus deberes). Los medios de comunicación pueden reportar un crimen, la investigación y el procedimiento criminal en cualquier momento, incluso después de que concluya el juicio, salvo que un tribunal ordene lo contrario.

#### **RESPUESTA SI:**

---

<sup>13</sup> Corresponden a los siguientes Estados: Bolivia, Estados Unidos, Jamaica y Venezuela.

**De un total de 15 países, 10 de ellos respondieron afirmativamente<sup>14</sup>:**

- 1) Argentina: Se señala la ley N° 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Esta ley establece un régimen de declaraciones juradas:
  - Determinados funcionarios de nivel superior deberán presentar una declaración jurada patrimonial integral dentro de los treinta días hábiles desde la asunción de sus cargos.
  - Asimismo, deberán actualizar la información contenida en esa declaración jurada anualmente y presentar una última declaración, dentro de los treinta días hábiles desde la fecha de cesación en el cargo.
  - La declaración jurada deberá contener una nómina detallada de todos los bienes, propios del declarante, propios de su cónyuge, los que integren la sociedad conyugal, los del conviviente, los que integren en su caso la sociedad de hecho y los de sus hijos menores, en el país o en el extranjero.
- 2) Chile: Se señala que en todas las instituciones públicas se establece una obligación de transparencia activa.
- 3) Costa Rica: Se distingue las situaciones dadas para funcionarios URA y funcionarios UIF:
  - URA: Los artículos 84 de la Ley N°8204 y el artículo 26 de la Ley contra la Delincuencia Organizada establecen que el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) asumirá en depósito Judicial de manera exclusiva, los bienes que se consideren de interés económico y que se hayan incautado en causas relacionadas con los delitos que comprenden dichas leyes; lo cual implica q los funcionarios de la institución en ejercicio de su cargo, deben de asumirlos en esa condición. Así, tratándose de los funcionarios de la URA, sus nombres, apellidos y números de identificación aparecen en el documento de depósito judicial (mediante el cual la autoridad judicial nombra al ICD en la persona de un funcionario de la URA, el cual forma parte del expediente judicial). Lo anterior expone la identidad del funcionario de la URA porque éste tiene conocimiento sobre los bienes. Por otra parte, la jefatura de la URA debe rendir anualmente la declaración de bienes relacionada, documento en el cual se provee información personal y se actualizan datos ante otra Institución del Estado.
  - UIF: Los funcionarios de la UIF se mantienen protegidos en un ámbito de anonimato ante medios de prensa. No obstante, no hay procedimientos internos, por lo que se trataría de una situación informal. No se publica información ni datos sobre los funcionarios de la UIF.
- 4) Guatemala: Se señala que de conformidad con la Ley en la materia, la información relativa a los procesos y aspectos de vigilancia e inspección por parte de la

---

<sup>14</sup> Corresponden a los siguientes Estados: Chile, Argentina, Guatemala, México, Costa Rica, República Dominicana, Paraguay, Perú, Panamá y Colombia.

Superintendencia de Bancos, de los que forma parte la Unidad de Análisis Financiero, tienen carácter de reserva.

- 5) México: De forma excepcional puede ser reservada cierta información. Tratándose de la UIF únicamente es público el nombre y los datos de contacto del Titular de la institución y no así de los funcionarios<sup>15</sup>. Al respecto se señalan los artículos 3, 7, 13 y 45 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y los artículos 8 y 14 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
- 6) Panamá: Se indica la ley N° 6 de 22 de enero de 2002 “Que dicta normas para la transparencia en la gestión pública” (G.O. 24476 de 23 de enero de 2002).
- 7) Paraguay: Se señalan los artículos 1 y 3 de la ley N° 5189 del 20 de mayo de 2014, que establece la obligatoriedad de la provisión de información en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay.
  - El artículo 1° establece que todos los Organismos o Entidades Públicas, Entes Binacionales y aquellos en los que el Estado paraguayo tenga participación accionaria, u organismos privados que administre recursos del mismo, deberán difundir a través de portales electrónicos en internet, todas las informaciones de fuente pública, relativas al organismo o la entidad y a los recursos administrativos y humanos de los mismos.
  - Por su parte, el artículo 3 establece el contenido de la información que deberá ser publicada (estructura orgánica, funciones, dirección y teléfono de la entidad, nómina completa de funcionarios, presupuesto de ingresos, detalle de viajes financiados con fondos públicos, inventario de bienes de las instituciones, etc).

---

<sup>15</sup> Se señala además que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) indica que las dependencias de gobierno deberán hacer público el directorio e información de contacto de los funcionarios adscritos a las instituciones públicas, a partir del nivel de Jefe de Departamento. No obstante lo anterior, con base en la consulta 01/13 realizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito público al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, se determinó que “es dable señalar que revelar la información respecto de los nombres y datos de contacto del personal que guarda un contacto directo e inmediato con información estratégica, podría poner en peligro su vida o su seguridad, incluso la de sus familiares, ya que dicha información podría ser utilizada para que individuos o grupos delincuenciales, obtengan datos, a través de éstos, que les sirvan de insumo para fines criminales o ilícitos con ánimo de causar daño a los mismos servidores públicos o a sus familiares.”

De esta manera, se consideró procedente la reserva del nombre y datos de contacto de los servidores públicos adscritos a la UIF con excepción del Titular de la misma con fundamento en el artículo 13, fracción I y IV de la LFTAIPG, toda vez que la difusión de dicha información puede comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional o bien poner en riesgo la vida, seguridad o salud de dichos funcionarios públicos.

En conclusión, de acuerdo con la consulta anteriormente citada, los nombres e información de contacto de los funcionarios de la UIF es de carácter reservado, con la excepción de la información del Titular de la Unidad.

Vínculo del documento: [http://inicio.ifai.org.mx/SecPublicoConsult/01-13%20SHCP%20SAC%20\(Pleno%2029-05-13\).PDF](http://inicio.ifai.org.mx/SecPublicoConsult/01-13%20SHCP%20SAC%20(Pleno%2029-05-13).PDF)



- 8) Perú: Si bien no existe una ley específica sobre la materia, la Ley N° 27619 regula la autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos que irroguen gasto al Tesoro Público. De esta manera, si funcionarios UIF/OIC/OAB realizan un viaje al exterior del país financiados con fondos del Tesoro Público, los datos de estos y sus cargos serán publicados en el Diario Oficial El Peruano.
- 9) República Dominicana: La ley N°200-04 de libre acceso a la Información Pública fue dictada con el objeto de fortalecer la transparencia, pero siempre y cuando dicha información no comprometa de alguna forma la seguridad nacional.
- 10) Colombia: La Ley de Transparencia establece unas excepciones al acceso a la información pública. Dentro de esas excepciones está la Ley de Inteligencia; ésta última señala que la identidad de los servidores públicos de inteligencia está sujeta a reserva.

#### **PREGUNTA 5:**

**¿EXISTA ALGUNA INSTITUCIÓN EN PARTICULAR QUE LE CORRESPONDA EVALUAR EL NIVEL DE RIESGO ANTE UNA AMENAZA?**

#### **RESPUESTA NO:**

**De un total de 15 países, solo 5 respondieron negativamente<sup>16</sup>.**

#### **RESPUESTA SI:**

**De un total de 15 países, 9 de ellos respondieron afirmativamente<sup>17</sup>:**

- 1) Argentina: Ante una amenaza le corresponde al Poder Judicial entender en el caso, contando para ello con las Fuerzas de Seguridad Federales, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, ejercerán competencias policiales propias del Estado Federal según las misiones, funciones y jurisdicciones territoriales que para cada una de ellas se determinan en la ley. Además, el Poder Judicial cuenta con la colaboración de los organismos de inteligencia nacional. Todo lo anterior, de conformidad con las siguientes leyes: (1) Ley 23984 (Código Procesal Penal de la Nación); (2) Ley 18711 de Fuerzas de Seguridad; y (3) Ley 25250 de Inteligencia Nacional.
- 2) Canadá: Se señala que las agencias directivas son las que están en posición de colaborar y evaluar la magnitud de la amenaza.

<sup>16</sup> Corresponden a los siguientes Estados: Guatemala, República Dominicana, Bolivia, Paraguay y Costa Rica.

<sup>17</sup> Corresponden a los siguientes Estados: Canadá, Chile, Perú, Venezuela, Jamaica, Estados Unidos, México, Argentina, Panamá y Colombia.

- 3) Chile: Se señala que la evaluación es realizada por el Jefe de la Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos (URAVIT) en conjunto con el Fiscal Regional.
- Dentro de los elementos que estos deberán tener en cuenta para evaluar el riesgo existente, lo que permitirá elaborar la Estrategia de Protección a seguir, se encuentran: (1) Existencia de una amenaza; (2) Antecedentes sociales del fiscal y su familia; (3) Características de los potenciales agresores y; (4) Tipo de delito.
  - Adicionalmente se propone solicitar antecedentes adicionales que puedan enriquecer la evaluación, a través de la solicitud a las policías de análisis de campo respecto a las vulnerabilidades de seguridad del fiscal y su familia y las recomendaciones para poder enfrentarlas; informe de factibilidad financiera y técnica a la Unidades Regionales de Atención a Víctimas y Testigos (URAVIT) y ponderación del costo alternativo de las medidas (impacto en la pérdida de privacidad, sobreexposición, limitaciones a la movilidad, entre otras).
- 4) Estados Unidos: Se remite a la respuesta dada a propósito de la pregunta N° 2<sup>18</sup>
- 5) Jamaica: Se señala que existe un Memorando de entendimiento (MOU) con la policía de Jamaica (JCF), sin dar detalles al respecto.
- 6) México: Se señala que si a nivel general se cuenta con el Servicio de Protección Federal, en la Procuraduría General de la República, se tiene dentro de la Policía Federal Ministerial (PFM) a la Dirección General de Servicios Especiales de Seguridad y de Protección a Personas. Esta última es la encargada de implementar, dirigir y evaluar los servicios de protección a personas de acuerdo a la normatividad aplicable. Asimismo, se cuenta con el Comité para la Determinación de Seguridad y Evaluación de las Medidas de Seguridad y Protección de Personas, en el marco de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Todo lo anterior, de conformidad con los siguientes manuales y normas:
- Manual de Organización General del Servicio de Protección Federal
  - Artículos 12 y 15 del Reglamento del Servicio de Protección Federal
  - Artículos 25 y 80 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República
- 7) Panamá: El Ministerio Público es el responsable de velar por la protección de cualquier colaborador en un proceso penal, de acuerdo a lo normado por el artículo 20 de la Ley N° 63 de 28 de agosto de 2008 “Que adopta el Código Procesal Penal” (G.O. 26114 de 29 de agosto de 2008).
- Además, según lo prevé el Decreto Ejecutivo N° 263 de 19 de marzo de 2010 “Que crea el Consejo de Seguridad Nacional” (G.O. 26493-A de 19 de marzo de 2010) esta entidad es la instancia del Órgano Ejecutivo y el máximo organismo de consulta para

---

<sup>18</sup> “Todas las agencias de gobierno de los Estados Unidos ha establecido protocolos y procedimiento para la seguridad de su personal. En concreto, la Oficina de Seguridad de la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) implementa políticas de seguridad, procedimientos, normas, capacitación y métodos para la identificación y protección de información, del personal, de los bienes, instalaciones, operaciones o material de la divulgación no autorizada, mal uso, robo, asalto, vandalismo, espionaje, sabotaje o pérdida.”

establecer y articular la política de seguridad y defensa del Estado, por lo que debe recomendar, formular y evaluar la política y estrategias en esta materia.

- 8) Perú: Señalan que la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) realizan labores de Contra Inteligencia para detectar actividades que atenten contra la Seguridad Nacional. Lo anterior, de conformidad con la Ley N° 28664 sobre Sistema de Inteligencia Nacional (SINA) y la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI); y el Decreto Legislativo N° 1141 de Fortalecimiento y Modernización del Sistema de Inteligencia Nacional - SINA y de la Dirección Nacional de Inteligencia – DINI.
- 9) Venezuela: Se refieren a la Constitución Política y al Código Penal, señalando al respecto “si hablamos de una medición de riesgo de amenazas como tal, no la hay pero contamos con el Ministerio Público quien ejerce la acción penal y es el Organismo encargado de recibir la denuncia de amenaza hacia el funcionario cuando la hubiere y decidir si es un delito de acción privada.”
- 10) Colombia: Es la Unidad Nacional de Protección -UNP-. Ahora, la Ley de Inteligencia señaló que cada organismo de inteligencia, tratándose de esta actividad, establecerá los mecanismos de protección correspondientes.

#### **PREGUNTA 6:**

**¿EXISTE ALGUNA INSTITUCIÓN QUE SEA LA ENCARGADA DE DEJAR SIN EFECTO DETERMINADAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, POR NO EXISTIR UN DETERMINADO NIVEL DE RIESGO?**

#### **RESPUESTA NO:**

**De un total de 15 países, solo 6 respondieron negativamente<sup>19</sup>. De estos, 1 (Canadá) lo hizo con observaciones de fondo:**

- En el caso de Canadá, hay que distinguir. Tratándose de FIU, dichas situaciones son manejadas internamente en FINTRAC. Por otro lado, las LEA se guían por las políticas policiales de sus organismos directivos.

#### **RESPUESTA SI:**

**De un total de 15 países, 7 de ellos respondieron afirmativamente<sup>20</sup>:**

<sup>19</sup> Corresponden a los siguientes Estados: Costa Rica, Paraguay, Bolivia, República Dominicana, Canadá y Guatemala

<sup>20</sup> Corresponden a los siguientes Estados: Argentina, Chile, Estados Unidos, Jamaica, México, Panamá, Perú y Venezuela.

- 1) Argentina: Se señala que de conformidad con el Código Procesal Penal de la Nación y la ley 18711 de Fuerzas Especiales, la evaluación del riesgo y la adopción de medidas de seguridad corresponden al Poder Judicial y Fuerzas de Seguridad Federales.
- 2) Chile: Se señala que los encargados son el Jefe de URAVIT en acuerdo con el Fiscal Regional, quienes se deben basar en los informes encargados a las policías respectivas.
- 3) Estados Unidos: Se remite a la respuesta dada a propósito de la pregunta N° 2<sup>21</sup>
- 4) Jamaica: Sólo señala que es la Policía de Jamaica (JCF)
- 11) México: La Dirección General de Operaciones del Servicio de Protección Federal, es la encargada de dirigir, formular y actualizar la Guía Base para la Elaboración del Análisis de Riesgos, por lo que es la encargada de determinar cuándo deja de surtir efecto la medida de seguridad. Por su parte, en la Procuraduría General de la República, es la Dirección General de Servicios Especiales de Seguridad y de Protección a Personas la facultada para evaluar los servicios de protección a personas y en consecuencia, también puede determinar cuándo dejar sin efecto la medida de seguridad. Finalmente, también se podría hacer a través de la Secretaría de la Función Pública y del Sistema de Administración Tributaria "SAT". La primera, al momento de autorizar el pago por riesgo que se menciona en la pregunta N°9 y, el SAT, porque al solicitar un escolta para los funcionarios, ellos determinan si es procedente o la solicitud o no. Todo lo anterior, de conformidad con los siguientes manuales y normas:
  - Manual de Organización General del Servicio de Protección Federal
  - Artículos 12 y 15 del Reglamento del Servicio de Protección Federal
  - Artículos 25 y 80 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República
- 5) Panamá: Le corresponderá al Ministerio Público, según lo descrito en la respuesta número 5.
- 6) Perú: Se señala que como consecuencia de un diagnóstico se determina si cierto funcionario UIF/OIC/OAB no registra mayor riesgo, y en caso que este tenga asignado escoltas (guardaespaldas), la Policía Nacional del Perú podría disponer la reasignación de los escoltas.
- 7) Venezuela: Sólo se señala que es el Ministerio Público, de conformidad con el Código Penal.

Hubo 2 países que no respondieron esta pregunta.

---

<sup>21</sup> "Todas las agencias de gobierno de los Estados Unidos ha establecido protocolos y procedimiento para la seguridad de su personal. En concreto, la Oficina de Seguridad de la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) implementa políticas de seguridad, procedimientos, normas, capacitación y métodos para la identificación y protección de información, del personal, de los bienes, instalaciones, operaciones o material de la divulgación no autorizada, mal uso, robo, asalto, vandalismo, espionaje, sabotaje o pérdida."

#### PREGUNTA 7:

**¿EXISTE UNA POLÍTICA DE AUTO CUIDADO DE LOS FUNCIONARIOS DEL SISTEMA ALA/CFT QUE PERMITA PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO?**

#### RESPUESTA NO:

**De un total de 15 países, solo 8 respondieron negativamente<sup>22</sup>. De estos, 1 (Perú) lo hizo con observaciones de fondo:**

- En el caso de Perú, se señala que la UIF-Perú dispuso medidas de seguridad respecto al local y las instalaciones en donde trabajan los funcionarios que manejan información confidencial, por ejemplo se ha dispuesto la habilitación de un local sin acceso al público y que no sea visible, entre otras medidas. Por otro lado, los funcionarios de UIF al ser parte de las Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs tienen para su protección protocolos de seguridad establecidos, tales como anotación de las placas de los vehículos que abordan al salir de las instalaciones, registro de los visitantes, entre otros.

#### RESPUESTA SI

**De un total de 15 países, 6 de ellos respondieron afirmativamente<sup>23</sup>:**

- 1) Argentina: Se señala que existen capacitaciones a los funcionarios sobre la prevención de situaciones de riesgos. Además, todas las dependencias de la UIF de Argentina cuentan con las medidas de seguridad apropiadas (planos de evacuación, extintores, etc.). Por último el Art. 22 de la Ley 25246 prevé que los funcionarios y empleados de la Unidad de Información Financiera están obligados a guardar secreto de las informaciones recibidas en razón de su cargo, al igual que de las tareas de inteligencia desarrolladas en su consecuencia. El mismo deber de guardar secreto rige para las personas y entidades obligadas por esta ley a suministrar datos a la Unidad de Información Financiera. El funcionario o empleado de la Unidad de Información Financiera, así como también las personas que por sí o por otro revelen las informaciones secretas fuera del ámbito de la Unidad de Información Financiera, serán reprimidos con prisión de seis meses a tres años.
- 2) Canadá: Para FIU se remite a lo señalado en la pregunta 1. En el caso de LEA, el entrenamiento policial incluye tomar medidas preventivas para garantizar la seguridad personal en todo momento.

<sup>22</sup> Corresponden a los siguientes Estados: Guatemala, República Dominicana, Bolivia, Paraguay, Estados Unidos, Chile, Panamá y Perú.

<sup>23</sup> Corresponden a los siguientes Estados: Argentina, Canadá, Costa Rica, Jamaica, México y Venezuela.

- 3) Costa Rica: Se señala que no hay políticas formales emanadas de un ente Rector en esta materia y que las disposiciones existentes se aplican por asuntos perceptivos de cada Unidad:
- UIF: Se ha establecido mediante directrices internas, que los informes emanados de la UIF para el Ministerio Público y Policía Judicial no incluyan el nombre del analista, únicamente el código. Adicionalmente, se ha establecido que los analistas de la UIF no podrán participar como peritos en juicios o procesos penales.
  - URA: Actualmente, los funcionarios de la URA no se apersonan en los allanamientos que realiza la policía judicial con el fin trasladar los bienes incautados hasta las bodegas para su custodia. Lo anterior a partir de que se emitió por la Asesoría Legal del ICD el Criterio Legal CL-010-2011 del 24 de octubre de 2011 y el Criterio de la Procuraduría General de la República C-187-2013 del 16 de septiembre de 2013.
- 4) Jamaica: Sólo se señala que se requieren a los oficiales usar ropa de protección especialmente marcada cuando se encuentran en operaciones.
- 5) México: Sólo se señala que en cada una de las dependencias existen programas de seguridad y reducción de riesgo, así como una permanente difusión en cuestiones de seguridad
- 6) Venezuela: Solo se señala que existen políticas “implementadas por lo propios funcionarios”

Hubo un país que no respondió esta pregunta

#### **PREGUNTA 8:**

**¿SE HAN GENERADO MECANISMOS DE COOPERACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS ACTORES DEL SISTEMA ALA/CFT CON EL OBJETO DE ENFRENTAR DE FORMA INTEGRAL UNA AMENAZA?**

#### **RESPUESTA NO:**

**De un total de 15 países, 10 respondieron negativamente<sup>24</sup>. De estos, 1 (México) lo hizo con observaciones de fondo:**

- En el caso de México, no obstante, se señaló que el combate al Lavado de Dinero (LD) y el Financiamiento al Terrorismo (FT) se realiza de manera coordinada a nivel interinstitucional (Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través de la UIF, CNBV, SAT, entre otras; Procuraduría General de la República [PGR] a través de la UEIOPIFAM, AIC, PFM, CENAPI; Secretaría de Gobernación [SEGOB] a través de la CNS y PF;

<sup>24</sup> Corresponden a los siguientes Estados: Jamaica, Costa Rica, Perú, Chile, Paraguay, Bolivia, República Dominicana, Guatemala, Panamá y México.

entre otras dependencias); sin embargo, se debe considerar que hasta el momento no se ha presentado un supuesto de estos, pero de ocurrir, sí se podrían instrumentar mecanismos de cooperación entre todos los actores que intervienen en la investigación del LD y el FT, dadas las acciones coordinadas y de cooperación que existen entre ellas.

## RESPUESTA SI

**De un total de 15 países, solo 5 de ellos respondieron afirmativamente<sup>25</sup>:**

- 1) Argentina: Se señalaron las leyes 18711 y 25246; indicándose que es obligatoria la cooperación y actuación supletoria entre Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria, como igualmente cualquier otro organismo nacional que ejerza funciones policiales análogas. Dicha cooperación se materializa respetando la titularidad jurisdiccional de cada una de estas instituciones u organismos.
- 2) Canadá: Se señala que los organismos directivos están en posición de colaborar.
- 3) Estados Unidos: No se detalla información al respecto.
- 4) Venezuela: Se señaló que en virtud de los convenios internacionales, todas las Instituciones que tienen responsabilidad en la prevención, control, fiscalización y supervisión del delito de legitimación de capitales se articulan para enfrentar las amenazas dirigidas a los funcionarios que laboran en áreas ALD/CFT.
- 5) Colombia: Aquí pueden mencionarse el CCICLA, EL C4, la JIC.

## PREGUNTA 9:

**¿LAS DISTINTAS INSTITUCIONES CONTRATAN ALGÚN TIPO DE SEGURO RESPECTO DE LOS FUNCIONARIOS QUE TRABAJAN EN ESTE TIPO DE INVESTIGACIONES?**

## RESPUESTA NO:

**De un total de 15 países, 11 respondieron negativamente<sup>26</sup>. De estos, 5 lo hicieron con observaciones de fondo (Argentina, Costa Rica, México, Perú y Canadá) :**

- En el caso de Argentina, se observó que todos los agentes de la UIF cuentan con un seguro de riesgo de trabajo y un seguro de vida obligatorio contratado por el organismo, existiendo un régimen especial para aquellos agentes que realizan tareas de investigación.

<sup>25</sup> Corresponden a los siguientes Estados: Venezuela, Argentina, Estados Unidos, Canadá y Colombia.

<sup>26</sup> Corresponden a los siguientes Estados: República Dominicana, Bolivia, Paraguay, Estados Unidos, Chile, Jamaica, Panamá, México, Argentina, Perú, Costa Rica y Canadá.

- En el caso de Costa Rica, no hay condiciones excepcionales de aseguramiento por parte del patrono hacia estos funcionarios, se considera un funcionario normal, no hay políticas excepcionales ni diferenciadas (se cuenta con un seguro a nivel laboral, por riesgo de accidentes laborales que es algo básico para todo funcionario público), sin embargo, se señala que el Poder Ejecutivo consideró pertinente establecer un incentivo escalonado que se denomina “Incentivo por Peligrosidad, Confidencialidad y Discrecionalidad de todos los funcionarios del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD)”, destinado a retribuir económicamente a todos los funcionarios del Instituto, cuyas plazas estén cubiertas por el presupuesto del Instituto, por los peligros y riesgos que conlleva la prestación de sus servicios, la confidencialidad en la información que maneja la institución, la discrecionalidad en los asuntos que se conoce y tramitan en el Instituto y el grado de responsabilidad del servidor. El incentivo consiste en un porcentaje del salario base mensual de la clase de puesto y corresponderá a un cuarenta y cinco por ciento (45%) para todos los puestos de Dirección y Jefaturas y, un treinta y cinco por ciento (35%) para todos los demás funcionarios del Instituto Costarricense sobre Drogas. Como se indica, el presente es un incentivo, pero no un seguro.
- En el caso de México, tratándose de la UIF, no existe un seguro para los funcionarios que trabajan en este tipo de investigaciones. No obstante, se señala que cuentan con el seguro institucional de vida, así como el seguro de responsabilidad civil, y de la misma manera, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, se prevé otorgar al personal que ocupa los puestos de mayor riesgo una compensación adicional denominada “Pago por Riesgo”, misma que es autorizada por la Secretaría de la Función Pública. Existen además seguros de vida y de riesgo, contratados por las dependencias para los funcionarios y, en la Procuraduría General de la República se tienen los siguientes: Seguro de Riesgo, Seguro Social y Seguro de Gastos Médicos Mayores.
- En el caso de Perú, se señala que en la UIF (SBS) existe un proyecto de directiva respecto a la contratación de un seguro especial para los funcionarios de UIF.
- En el caso de Canadá, se señala que los funcionarios están protegidos como parte del Servicio público del Gobierno de Canadá, pero que no existe un seguro adicional para los policías envueltos en investigaciones por delitos financieros.

## RESPUESTA SI

**De un total de 15 países, solo 3 de ellos respondieron afirmativamente<sup>27</sup>:**

---

<sup>27</sup> Corresponen a los siguientes Estados: Venezuela y Guatemala



- 1) Guatemala: Solo se señala que existe seguro de gastos médicos y seguro de vida para el Jefe de la Unidad de Análisis Financiero.
- 2) Venezuela: Se señala que los funcionarios y funcionarias cuentan dentro de sus beneficios de pólizas de seguro no solo para cubrir cualquier eventualidad relacionada con los delitos de ALD/CFT sino también para accidentes personales, y póliza de vida por ejemplo.
- 3) Panamá: La Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Delito de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo contrata un seguro médico privado para sus funcionarios

Hubo un país que no respondió esta pregunta

#### **PREGUNTA 10:**

**¿LOS DISTINTOS ACTORES DEL SISTEMA PRIVILEGIAN LA PROTECCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS POR SOBRE LOS RESULTADOS DE UNA DETERMINADA INVESTIGACIÓN?**

#### **RESPUESTA NO:**

**De un total de 15 países, 7 respondieron negativamente<sup>28</sup>:**

#### **RESPUESTA SI**

**De un total de 15 países, 7 de ellos respondieron afirmativamente<sup>29</sup>:**

- 1) Argentina: Se señala que ante el caso de una amenaza inminente contra alguno de los miembros de la UIF se tomarían todas las medidas de seguridad apropiadas para protegerlo. Hasta el momento, no han existido situaciones de amenazas a los miembros de la UIF.
- 2) Canadá: Se señala que la Policía aborda seriamente la seguridad de sus oficiales, víctimas, testigos y de las personas en general, por lo que hará cumplir las leyes mientras asegure la protección de todos los involucrados en el proceso penal, incluyendo la seguridad de las personas imputadas o acusadas.
- 3) Chile: Sólo se señala que la protección de los funcionarios es la prioridad.

<sup>28</sup> Corresponden a los siguientes Estados: Jamaica, Costa Rica, Perú, Paraguay, Bolivia, República Dominicana y Guatemala.

<sup>29</sup> Corresponden a los siguientes Estados: Argentina, Canadá, Chile, Estados Unidos, México, Panamá y Venezuela.

- 4) Estados Unidos: No se dan detalles al respecto
- 5) México: Se señala que en cuestiones de protección de personas, se privilegia la seguridad de los funcionarios, toda vez que la vida e integridad física de los mismos es un bien jurídico tutelado de mayor valor que las investigaciones que se realizan.
- 6) Panamá: Se señala que a raíz de las recomendaciones CONAPRED se encuentra desarrollando acciones al respecto.
- 7) Venezuela: No se dan detalles al respecto.

Hubo un país que no respondió esta pregunta

#### **PREGUNTA 11:**

**¿EN EL CASO DE EXISTIR UNA AMENAZA INMINENTE CONTRA ALGUNO DE LOS MIEMBROS DE LA UIF, OIC U OAB, LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD TIENDEN A DISTANCIARLO DEL CASO, O POR EL CONTRARIO, SE PREFERE QUE SIGA A CARGO DEL MISMO FUNCIONARIO?**

#### **RESPUESTA NO:**

**De un total de 15 países, 7 respondieron negativamente<sup>30</sup> y 1 respondió SI/NO (Canadá) con observaciones de fondo:**

- En el caso de Canadá, se distinguen dos situaciones. Tratándose de la FIU, se señala que FINTRAC evalúa las situaciones internamente según caso a caso. Por su parte, tratándose de LEA, las amenazas dirigidas en contra de un oficial de policía en una investigación por delitos financieros es considerado grave y debe ser investigado. La reasignación de la investigación es una decisión que se toma basada en el caso a caso teniendo especial consideración a la seguridad y bienestar de las personas involucradas.

#### **RESPUESTA SI**

**De un total de 15 países, 5 de ellos respondieron afirmativamente<sup>31</sup>:**

- 1) Argentina: Se señala que ante el caso de una amenaza inminente contra alguno de los miembros de la UIF se tomarían todas las medidas de seguridad apropiadas para protegerlo. Hasta el momento, no han existido situaciones de amenazas a los miembros de la UIF.

<sup>30</sup> Corresponden a los siguientes Estados: Guatemala, República Dominicana, Bolivia, Paraguay, Perú y Costa Rica.

<sup>31</sup> Corresponden a los siguientes Estados: Argentina, Chile, Estados Unidos, México y Venezuela

- 2) Chile: Se señala que por regla general lo distancian del caso y que, de hecho, en algunos casos han existido reubicaciones fuera de la región.
- 3) Estados Unidos: Se remite a lo señalado a propósito de la pregunta N°1<sup>32</sup>
- 4) México: Se señala que por secrecía y éxito de la investigación se prefiere que el funcionario continúe con el caso, lo anterior considerando también que los servidores públicos encargados de llevar a cabo esta labor están conscientes del riesgo que sus actividades implican. No obstante, en cuestiones de protección de personas se privilegia la seguridad de los funcionarios, atendiendo a que su vida e integridad física es un bien jurídico tutelado de mayor valor que el de las investigaciones que se realizan. En ese sentido, al detectar un alto riesgo se puede valorar el relevo del mismo del caso.
- 5) Venezuela: Señala que los funcionarios son apartados de sus investigaciones.

Huno un país que no respondió esta pregunta

#### PREGUNTA 12:

**¿POSEE PROTOCOLOS QUE PERMITAN BRINDAR PROTECCIÓN JURÍDICA A SUS FUNCIONARIOS?**

#### RESPUESTA NO:

**De un total de 15 países, 6 respondieron negativamente<sup>33</sup>, de estos últimos, 2 lo hicieron con observaciones de fondo (Argentina y México). A su vez, 1 país respondió SI/NO (Perú):**

- En el caso de Argentina, se señala que eventualmente se podrá disponer la reserva de la identidad de un testigo o imputado que hubiere colaborado con la investigación de determinados delitos, siempre y cuando resultare necesario preservar la seguridad de los nombrados, disponiéndose medidas especiales de protección. Asimismo, es susceptible de quedar comprendido en la Ley 25.764 de Protección de Testigos, dependiendo del delito de que se trate.
- En el caso de México se señala que si bien no existen este tipo de protocolos en el sentido estricto de la palabra, el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en su artículo 49 señala que el Director General de Asuntos Jurídicos tendrá dentro de sus

<sup>32</sup> Párrafo 5318 letra G N°3 del título 31 del Código de Regulaciones Federales, referido al dinero y finanzas estable que, el banco, director, empleado o agente de cualquier banco, que reporte voluntariamente información acerca de transacciones sospechosas, no será responsable ante ninguna persona por dicho reporte o por cualquier error en la entrega de información de dicho reporte no aún respecto de la persona respecto de la cual fue elaborado el reporte. En este sentido, podemos señalar que se trata de una norma de protección respecto de eventuales acciones legales de la persona objeto del reporte en contra del sujeto obligado perteneciente a una institución bancaria.

<sup>33</sup> Corresponden a los siguientes Estados: Jamaica, Costa rica, Chile, Paraguay, Bolivia, República Dominicana y Panamá.

facultades, la posibilidad de brindar algún tipo de protección jurídica al respecto.

- En el caso de Perú se señala que la UIF (SBS) tiene directivas relacionadas a la defensa jurídica de los trabajadores y funcionarios, aun cuando hayan dejado de prestar servicios a la institución. Sin embargo, la Policía Nacional del Perú no tiene.

## **RESPUESTA SI**

**De un total de 15 países, 6 de ellos respondieron afirmativamente<sup>34</sup>:**

- 1) Canadá: Se distinguen dos situaciones. Tratándose de LEA, existe una política de asistencia legal, mientras que en el caso de FIU, el Servicio Legal del Departamento de Justicia está incluido dentro de la organización FINTRAC
- 2) Estados Unidos: Se remite a lo señalado a propósito de la pregunta N°1<sup>35</sup>
- 3) Guatemala: El Jefe de la Unidad de Análisis de Información goza del derecho de que la institución cubrirá los gastos por costas que sean necesarios para su defensa en procesos judiciales, aún después del ejercicio de su cargo.
- 4) Venezuela: Se indica que para los Funcionarios que laboran en la UIF y OAB que son considerados Funcionarios Públicos, la justicia laboral debe ser gratuita tanto en su sede laboral como en la sede administrativa del trabajo. Por otra parte tendrán derecho a la defensa en caso de imputaciones o denuncias que puedan acarrearles sanciones.
- 5) Panamá: Se debe remitir al artículo 58 de la Ley N° 23 de 27 de abril de 2015, tal como consta en la respuesta 1.
- 6) Colombia: Los servidores públicos están exceptuados del deber de denunciar y/o declarar

---

<sup>34</sup> Corresponden a los siguientes Estados: Canadá, Estados Unidos, Guatemala, Venezuela, Panamá y Colombia.

<sup>35</sup> Párrafo 5318 letra G N°3 del título 31 del Código de Regulaciones Federales, referido al dinero y finanzas establece que, el banco, director, empleado o agente de cualquier banco, que reporte voluntariamente información acerca de transacciones sospechosas, no será responsable ante ninguna persona por dicho reporte o por cualquier error en la entrega de información de dicho reporte no aún respecto de la persona respecto de la cual fue elaborado el reporte. En este sentido, podemos señalar que se trata de una norma de protección respecto de eventuales acciones legales de la persona objeto del reporte en contra del sujeto obligado perteneciente a una institución bancaria.